

Señores

JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Atn. Dr. WALTER MANUEL POSADA PÉREZ – Juez

Radicado Vía SAMAI

Referencia: Medio de control de reparación directa de **BLANCA LUCÍA CASTAÑO GARCÍA** contra **AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S.** y otros.

Expediente: 05001-33-33-008-2024-00278-00.

Asunto: Memorial de oposición a las excepciones de mérito formuladas por Latinoamericana de Construcciones S.A. e ISMOCOL S.A., integrantes del Consorcio ISLA 2020 Puerto Berrío.

MARIO ALEJANDRO CARRILLO PINEDA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.819.758 de Manizales, abogado portador de la tarjeta profesional No. 270.989 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico inscrito alejandro.carrillo@perezllorca.com, actuando en mi calidad de apoderado especial sustituto de **AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S.** (en adelante, “**ARM**”, el “llamante en garantía” o “mi representada”), tal y como se acredita con la sustitución al poder especial que reposa en el expediente, comparezco ante el Despacho con el fin de **PRONUNCIARME** sobre las excepciones de mérito formuladas por **LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.** e **ISMOCOL S.A.**, integrantes del **CONSORCIO ISLA 2020 PUERTO BERRÍO** (en adelante, la “CONSORCIO ISLA” o el “llamado en garantía”), en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

Según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), de las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días.

Asimismo, el párrafo del artículo 201A de la Ley 1437 de 2011 dispone que “*los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.*”

Como quiera que el llamado en garantía presentó memorial de contestación el 11 de septiembre de 2025, remitiendo en copia a los sujetos procesales, el término empezó a correr el día 12 de septiembre de 2025 y fenece el 18 de septiembre de la misma anualidad, por lo que este escrito se presenta oportunamente.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS EXCEPCIONES FORMULADAS

Las excepciones planteadas por el llamado en garantía carecen de fundamento, no están respaldadas por pruebas y, además, son completamente repetitivas de afirmaciones frente a las cuales mi mandante ya se ha pronunciado, contravirtiéndolas una a una.

2.1. Frente a la excepción denominada “Falta de legitimación en la causa del Consorcio”

El llamado en garantía expuso que el CONSORCIO ISLA no es el sujeto llamado a responder por las eventuales sumas que se lleguen a imponer en una sentencia condenatoria. Señaló que la figura de la indemnidad está condicionada a la existencia de un hecho imputable al contratista que dé lugar a reclamaciones por parte de terceros, y que en el presente caso no se configura ningún hecho atribuible al Consorcio que explique causalmente los daños reclamados por la parte demandante. Añadió que no existió conducta activa u omisiva por parte del Consorcio y que, por ende, ARM erró al vincularlo como garante.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado de antaño ha sido claro en señalar que luego de la presentación de la demanda, la parte actora debe probar efectivamente su condición de damnificado para obtener la favorabilidad de sus pretensiones, así: **“Así ha dicho que en la reparación directa, la legitimación en la causa está dada por la condición de damnificado del demandante, hablándose de legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda (...) siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio, en contraste con el presupuesto de sentencia favorable de las pretensiones que constituye la legitimación material, la cual se desprende de la prueba efectiva de la condición de damnificado, que le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la favorabilidad de las pretensiones.”**¹ [Énfasis agregado].

En esa medida, a juicio de esta representación, es claro que la excepción planteada por el CONSORCIO ISLA carece de asidero. En el eventual e improbable caso de que el H. Despacho considere que dicho CONSORCIO ISLA no cumplió con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe precisarse que los daños alegados por la demandante no son imputables a ARM, sino al CONSORCIO ISLA, en su condición de empleador del señor Fernando Antonio Morales Pasos al momento del accidente, y como responsable de cualquier culpa que hubiese podido ocasionar el deceso de éste. Como empleador, era el CONSORCIO ISLA el llamado a garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados, y, de comprobarse alguna omisión en ese ámbito (culpa), es este quien debe responder.

Aunado a lo anterior, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “[c]uando exista culpa suficiente comprobada del {empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, **está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios**” [Énfasis agregado]. Ello se armoniza con las obligaciones pactadas en las cláusulas contractuales del Contrato EPC (6.3.1.52., 19.1.1.2., 20.2.1.23.3. y 21.2.4.), que imponen al CONSORCIO ISLA la obligación de mantener indemne a ARM frente a cualquier reclamación de terceros.

¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez - Bogotá, D.C. 10 de agosto De 2005 - Radicación Número: 44001-23-31-000-1994-03444-01(13444); Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. 7 de septiembre de 2016. M.P.: Carlos Alberto Vargas Bautista. Rad. 2009-0030602; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. 7 diciembre de 2016. M.P.: Carlos Alberto Vargas Bautista. Rad. 2013-0006902.

Por tanto, lejos de excluir su responsabilidad, la relación material y contractual que lo vincula con los hechos del proceso ratifica que el CONSORCIO ISLA sí está llamado a responder en caso de comprobarse el daño, y que la excepción de *“falta de legitimación en la causa”* debe ser desestimada.

2.2. Frente a la excepción denominada *“Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato EPC por parte del Consorcio Isla 2020 Puerto Berrío”*

El llamado en garantía sostuvo que el CONSORCIO ISLA cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales y legales en la ejecución del Contrato EPC, incluyendo la excavación para la alcantarilla del PR 10+183, realizada conforme a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS-2013, los diseños entregados por el contratante y la normativa de seguridad laboral vigente. Indicó que la obra fue recibida y pagada sin que se iniciaran procesos sancionatorios, que el Ministerio del Trabajo archivó la investigación adelantada tras el accidente del trabajador Fernando Antonio Morales Pasos al verificar el cumplimiento de las normas de riesgos laborales, y que la excavación se ejecutó con taludes adecuados, análisis de trabajo seguro, capacitaciones, charlas de seguridad e inspecciones antes y durante su ejecución.

Ahora bien, esta representación comparte que el CONSORCIO ISLA cumplió con sus obligaciones contractuales y de seguridad en el trabajo, como se desprende de los protocolos acreditados y de la actuación de las entidades de control. Sin embargo, para el eventual y remoto caso de que el H. Despacho considerara que no se observaron los estándares mínimos exigidos por la normativa aplicable, es necesario precisar que tal situación no puede ser imputada a ARM.

Lo anterior, por cuanto, de conformidad con la Ley 9 de 1979, el Decreto Ley 1295 de 1994, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la Norma ISO 45001:2018, entre otras, son los empleadores quienes deben garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, era el CONSORCIO ISLA, como empleador del señor Fernando Antonio Morales Pasos, el llamado a asegurar tales condiciones.

En esa medida, si bien estimamos que el CONSORCIO ISLA cumplió con los protocolos HSE, las capacitaciones, los análisis de trabajo seguro y demás medidas de prevención, en caso de que el H. Despacho considere lo contrario, el hecho sería atribuible exclusivamente al CONSORCIO ISLA y no a ARM, quien no tenía la calidad de empleador ni detentaba obligaciones directas en materia de seguridad y salud en el trabajo frente al occiso. Por demás, ARM no podría llegar a ser hallado responsable por incumplimiento imputable a un tercero, en este caso, el llamado en garantía.

Por tanto, esta excepción debe ser entendida en el sentido de excluir cualquier responsabilidad de ARM, incluso en el evento de que se probara un incumplimiento por parte del CONSORCIO ISLA, lo cual en sí mismo activaría la cláusula de indemnidad en favor de mi representada.

2.3. Frente a la excepción denominada *“Improcedencia del llamamiento en garantía - incumplimiento de requisitos para formular el llamamiento en garantía”*

En relación con la excepción denominada *“Improcedencia del llamamiento en garantía – incumplimiento de requisitos para formular el llamamiento en garantía”*, el CONSORCIO ISLA sostiene que el llamamiento resulta improcedente porque, a su juicio, no se acreditó ningún

incumplimiento concreto que lo fundamentara. Según su postura, la parte llamante se limitó a invocar la existencia de un vínculo contractual y a citar algunas cláusulas, sin señalar de manera específica la conducta incumplida que diera lugar a su vinculación. En palabras del CONSORCIO ISLA, fue vinculado al proceso *“sin haberse siquiera concretado un incumplimiento de su parte en el multirreferido contrato, tanto así que ni siquiera la llamante concreta la presunta conducta infractora”*.

Tal planteamiento desconoce el alcance de la figura del llamamiento en garantía prevista en el artículo 225 del CPACA, el cual establece que *“quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”*. Adicionalmente, la norma precisa que el escrito de llamamiento deberá contener *“los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen”*. En este caso, es claro que el llamamiento no se limitó a una referencia genérica a la existencia de un contrato, sino que se sustentó en un hecho central y verificable: el señor Fernando Antonio Morales Pasos era empleado del CONSORCIO ISLA y no de ARM, lo que sitúa al Consorcio como único obligado frente a cualquier eventual reclamación derivada del accidente laboral ocurrido.

El marco contractual refuerza esta conclusión. El Contrato EPC estableció de manera expresa la obligación del CONSORCIO ISLA de mantener indemne a ARM. Así, la cláusula 6.3.1.52 dispone que el contratista debe *“mantener indemne a las Personas Indemnizables en los términos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de Concesión, cuando corresponda”*. La cláusula 19.1.1.2 agrega que el contratista deberá *“proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a las Personas Indemnizables **contra cualquier Reclamo de Terceros que surja en desarrollo de la ejecución del Contrato**”* y, adicionalmente, reembolsar los costos y gastos en que estas incurran en relación con cualquier procedimiento administrativo o judicial derivado de la ejecución del contrato, siempre que el reclamo se relacione con incumplimientos del contratista o de sus subcontratistas.

A estas previsiones se suman otras disposiciones contractuales, como las cláusulas 20.2.1.23.3. y 21.2.4., que también asignan al CONSORCIO ISLA la obligación de responder frente a terceros y de mantener indemne a ARM frente a **cualquier reclamación que surja con ocasión de la ejecución del contrato**. Dicho entramado contractual evidencia que, en el evento en que se comprobara algún incumplimiento vinculado con el accidente del señor Morales Pasos, el obligado a responder sería el CONSORCIO ISLA, en su calidad de empleador directo y contratista principal, y no ARM.

De esta manera, el llamamiento en garantía sí cumple con los presupuestos de procedencia exigidos por la normativa procesal, pues no se trató de una invocación vaga o carente de sustento, sino de la formulación de un vínculo contractual y de hechos específicos que justifican la pretensión de que, de llegarse a generar responsabilidad, sea el CONSORCIO ISLA quien asuma las consecuencias jurídicas y económicas. Pretender lo contrario, como lo hace la parte llamada en garantía, sería desconocer tanto el tenor de la ley como la literalidad de las obligaciones contractuales que asumió expresamente el CONSORCIO ISLA en el marco del Contrato EPC.

III. PRUEBAS

Respetuosamente solicito que se tengan como pruebas en relación con la oposición a las excepciones formuladas por el CONSORCIO ISLA, todas aquellas pruebas anunciadas en el escrito de contestación de demanda de ARM, así como en el llamamiento en garantía formulado contra las sociedades integrantes del CONSORCIO ISLA 2020.

Además, solicito que en los términos del artículo 192 y 199 del CGP, se decrete el interrogatorio de parte de los representantes legales de las sociedades que integran el CONSORCIO ISLA (así como al representante y/o vocero de esta última) para que de viva voz absuelva el interrogatorio que le formularé en la audiencia que se cite al efecto. Los representantes legales podrán ser citados a través de su apoderado y/o en las direcciones de correo electrónico que se indica en los respectivos certificados de existencia y representación legal que constan en el expediente.

IV. SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto, solicito respetuosamente al H. Despacho **DECLARAR** no probadas las excepciones propuestas por el CONSORCIO ISLA, por cuanto carecen de sustento fáctico y jurídico y, en consecuencia, no desvirtúan las pretensiones de la demanda de llamamiento en garantía ni los fundamentos fácticos que le sirven de soporte.

V. NOTIFICACIONES

ARM recibirá notificaciones en el correo de Notificaciones Judiciales notificaciones.arm@autopistamagdalena.com.co.

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Calle 67 No. 7 – 35, Oficina 1204 de la ciudad de Bogotá y/o en los correos electrónicos: david.araque@perezllorca.com, alejandro.carrillo@perezllorca.com y maria.tejedor@perezllorca.com.

Atentamente,



MARIO ALEJANDRO CARRILLO PINEDA

C.C. No. 1.053.819.758 de Manizales

T.P. No. 270.989 del C.S. de la J.